

Las políticas de la Concertación en Chile

- 31 Concertación de partidos por la democracia
RICARDO LAGOS
- 41 En torno al Chile que está siendo
OSVALDO PUCCIO HUIDOBRO
- 49 Consolidación de la democracia en Chile: papel del factor militar
JUAN EMILIO CHEYRE
- 61 La experiencia de la Concertación en Chile
HERNÁN LARRAÍN
- 71 Las cuatro singularidades del Gobierno de Michelle Bachelet
CARLOS HUNEEUS
- 89 La experiencia chilena y la obsolescencia del debate
EDMUNDO JARQUÍN

La concertación en Chile. Presentación

Que este número de Quórum esté dedicado a la experiencia de Chile se justificaría por el solo hecho que se cumplen 20 años del histórico plebiscito, que fue el inicio del fin de la dictadura de Pinochet. Pero hay otras razones y, si se quiere, de más fondo, como lo indica Edmundo Jarquín en su artículo que intenta ser una mirada «desde fuera» sobre el significado que la experiencia chilena tiene para América Latina, y su renovado debate político-ideológico.

Los artículos que se presentan son como un observatorio de la experiencia chilena desde diferentes perspectivas, que terminan, sin haber una mano precisa que las articule, dando un cuadro global y coherente de la misma.

Convendría empezar leyendo los artículos del expresidente Ricardo Lagos y el embajador Osvaldo Puccio, porque presentan un cierto recuento histórico de esa experiencia. Y ambos transcurren, más allá del relato de por sí útil para quienes no tienen memoria inmediata del proceso, por líneas interpretativas que resultan de lo más sugerentes. Especialmente explicativa de la experiencia chilena son las razones con las cuales Lagos explica la transformación de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, «de lo que era una Concertación con un tiempo limitado en el horizonte» —la democratización— en una coalición permanente de gobierno que emprendería «tareas mayores», en particular la viabilización de un modelo de «crecimiento con equidad», del cual la experiencia chilena ha resultado paradigmática. Y entrega cifras contundentes al respecto. Puccio, a su vez, agrega un cierto inventario de las principales tareas pendientes desde el punto de vista de continuar la construcción democrática, indicando el déficit en cuanto a pluralismo en los medios de comunicación y la ausencia de un movimiento sindical fuerte y moderno.

Después hay tres trabajos que abordan perspectivas muy específicas. Juan Emilio Cheyre, ex Comandante en Jefe del Ejército, aborda en papel del «factor militar» tanto en la brusca y cruel interrupción del proceso democrático chileno, como en la recuperación democrática, y deja la clara sensación, desde su particular experiencia y atalaya, que la etapa deliberativa de las fuerzas armadas está definitivamente cerrada.

El artículo de Hernán Larraín guarda cierta parentela con el de Puccio en cuanto a las condiciones y circunstancias que hicieron posible la Concertación como coalición exitosa, electoral primero, y de gobierno, después. Pasa en seguida revista a lo que en su opinión son las razones por las cuales las condiciones del éxito se estarían disipando para advertir, no sin cierto pesimismo, sobre los riesgos inmediatos que la experiencia chilena enfrenta. Y así como Puccio advierte contra la vanidad de reclamar la «singularidad» del caso chileno, en el otro extremo alguien podría reclamar a Larraín los tonos que se podrían antojar muy agudos con los cuales pinta las dificultades. Pero nunca las advertencias sobran.

Carlos Huneeus hace una minuciosa disección de la mitad del período de gobierno de la Presidenta Bachelet, el cuarto de la Concertación. Y al tratar de establecer, aquí sí, la singularidad de este gobierno en relación a los tres anteriores, más allá de que es encabezado por una mujer y que hubo un drástico recambio generacional dirigenal, curiosamente arroja tanta luz sobre éstos que resulta un artículo que se complementa mucho con los tres anteriores en cuanto a explicar los orígenes, naturaleza y circunstancias que fueron moldeando la experiencia de la Concertación.

Finalmente, y como lo adelantamos, Edmundo Jarquín lee la experiencia chilena desde «afuera», desde lo que considera una cierta obsolescencia del debate latinoamericano, cuando en varios países vuelven a emerger las tentaciones autoritarias populistas, y no se es capaz de entender que «el mayor significado de la experiencia chilena radica en que demuestra, aquí, en nuestra región, que es posible superar ese debate ideológico polarizado y excluyente, y que, bajo determinadas condiciones institucionales y políticas, es posible construir una relación eficiente entre el Estado y el mercado, en términos de tener altas tasas de crecimiento sobre un período prolongado de tiempo y, a la vez, tener las políticas públicas que hagan posible que el bienestar derivado de ese crecimiento sea compartido por cada vez más población.»

Concertación de partidos por la democracia

The Coalition of Parties for Democracy

RICARDO LAGOS
Ex presidente de Chile

RESUMEN

La Concertación de Partidos por la Democracia es la coalición política más exitosa que ha existido en Chile. La Concertación ha ganado las cuatro elecciones presidenciales que han tenido lugar desde 1990, cuando se recuperó la democracia, hasta el presente. También ha ganado las cinco elecciones parlamentarias y las cuatro municipales. Pero más importante que el triunfo electoral son las transformaciones que esta coalición ha logrado para Chile.

Palabras Clave: Concertación de partidos por la democracia. Transición a la democracia. Políticas sociales. Derechos humanos. Política exterior.

ABSTRACT

The Coalition of Parties for Democracy is the most successful political coalition that has existed in Chile. The Agreement has won the past four presidential elections that were held in 1990, when democracy was recovered up to the present.

Also, the political agreement has won the five last parliamentary elections and the four local elections. But more important than this electoral triumph is the changes that this coalition has brought to Chile.

Key words: Coalition of parties for democracy. Transition to democracy. Social policies. Human rights. Foreign policy.

UN POCO DE HISTORIA

Las raíces de esta coalición política se hunden en los 17 años de dictadura que sufrió el país entre 1973 y 1990. La ruptura del sistema democrático chileno fue responsabilidad prácticamente de todas las fuerzas políticas. El golpe militar marcó una línea divisoria clara y nítida entre los que estaban por volver al sistema democrático, respetar los derechos humanos y establecer un Estado de derecho y aquellos que pensaban que debían seguir apoyando al régimen dictatorial. Es una línea divisoria que marca profundamente al sistema político chileno.

Sin embargo, para cuando en mayo de 1983, a diez años del golpe militar, se produce la primera gran protesta nacional, con motivo de la crisis económica que enfrentaba el país, una identidad crecientemente mayoritaria se había formado entre distintos sectores políticos acerca de cómo terminar la dictadura. Para entonces la economía había sufrido una crisis muy profunda, el producto había caído más del 20 por ciento en un año y el nivel de desocupación se acercaba peligrosamente al 20 por ciento. Es en estas condiciones, cuando cinco partidos políticos se unen para formar una primera coalición que tuvo el nombre de Alianza Democrática. Allí convergieron el Partido Demócrata Cristiano, una rama del Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata y un segmento que se desgaja del viejo Partido Liberal, encabezado por Armando Jaramillo y Julio Subercaseaux.

La Alianza Democrática, es tal vez la primera forma efectiva que la oposición encuentra

para enfrentar al régimen. Luego de las protestas la Alianza inicia conversaciones con el Ministro del Interior de la época, Sergio Onofre Jarpa que terminan en fracaso.

Sin embargo, junto con este grupo también surge el Movimiento Democrático Popular (MDP) que, formado por otra facción del Partido Socialista, entendía que era fundamental un entendimiento también con el Partido Comunista. Allí estaba implícito el problema de si se podía recurrir, como se decía en ese tiempo, «a todas las formas de lucha» para enfrentar al General Pinochet.

La división del mundo socialista es otro factor significativo. Con el objeto de buscar una convergencia de los distintos sectores del socialismo, se constituyó, también en el año 1983, el Bloque Socialista, que intentaba conjugar las diferentes sensibilidades que expresaban al viejo Partido Socialista y a segmentos provenientes de las divisiones que en la década de los 70 tuvo la Democracia Cristiana.

Mientras tanto, las protestas se suceden en 1984 y 1985. A instancias de la Iglesia Católica, en 1985 se firma un Acuerdo Nacional, en el que confluyen buena parte de los sectores de la Alianza Democrática, más algunos sectores vinculados a Sergio Onofre Jarpa, que había dejado el Gobierno, y algunos sectores de vertientes cristianas que estaban en el MDP.

Pero, para muchos analistas, 1986 fue el año decisivo. Decisivo en el sentido de que, terminado ese año, era claro que el Gobierno, de acuerdo con el esquema constitucio-

nal trazado por él mismo, iba a ir tras el plebiscito en 1988 para mantenerse en el poder. Decisivo porque un intento para internar un cargamento importante de armas es descubierto por el régimen en ese año. Decisivo, por último, porque un atentado contra la vida del general Pinochet termina en un fracaso. Por lo tanto, pareciera entonces que aquellos que postulaban todas las formas de lucha se dan cuenta que, irremediablemente, lo que está en lontananza es el plebiscito.

El horizonte de ese plebiscito significó, desde el punto de vista de las fuerzas de la futura Concertación, el que por primera vez se conociera el itinerario que debía recorrer el general Pinochet para mantenerse en el poder. De acuerdo a su constitución, tenía que transitar por un plebiscito. Y si se iba a transitar por ese camino, era posible prepararse para ello. El debate se centró en si aceptar o no el régimen institucional que contemplaba un plebiscito. Y, de aceptarlo, en si sería posible derrotar a Pinochet en ese referéndum. Al final se optó por inscribir a los partidos políticos. La idea de inscribir un solo partido, el Partido por la Democracia (PPD), no fue aceptada ni por el Partido Radical, ni por el Partido Demócrata Cristiano, ni por el Partido Socialdemócrata, todos los cuales hicieron los trámites para inscribirse. De acuerdo a la constitución de Pinochet, los socialistas no nos podíamos inscribir. Por ello propusimos que todos los demócratas inscribiéramos un solo partido. Como las otras corrientes políticas se inscribieron como tales, el PPD terminó siendo mayoritariamente socialista, más algunos sectores del Partido Radical y del Partido Liberal, amén de un gran número de independientes.

A partir de allí, el proceso tuvo una rapidez muy acelerada. Se trabajó en la conformación de partidos, en la necesidad de tener personas que vigilaran los lugares de votación. En otras palabras, el plebiscito fue un elemento dinamizador de la sociedad chilena. La decisión de enfrentar a Pinochet en el plebiscito, era la forma más democrática de decir NO. El plebiscito legitimó la viabilidad de enfrentar al régimen militar mediante una gran movilización ciudadana.

CAMINO A SER GOBIERNO

Luego del triunfo del NO la coalición se prepara para un Gobierno que se creía transitorio. Se hace una negociación para modificar la Carta constitucional de manera de derogar el Art. 8, que impedía al Partido Socialista inscribirse por estar en el perfil de los partidos marxistas y, al mismo tiempo, se acepta la reducción del período presidencial a cuatro años. Es irónico que una coalición triunfante acepte disminuir el período presidencial de ocho a cuatro años. Pero ya decíamos que estaba implícito en el pensamiento de los partidos que integraban la Concertación el que, después de cuatro años de transición, se volvería al antiguo sistema en que cada uno de los partidos actuaría por su cuenta.

Luego de las negociaciones entre los distintos partidos, se conviene en que Patricio Aylwin debe ser el candidato de la coalición para las elecciones presidenciales de diciembre del año 1989. Realizadas éstas, Patricio Aylwin obtiene sobre el 54 por ciento de la votación y asume la Presidencia de Chile en marzo de 1990, siendo el primero de los cuatro presidentes que la coalición da a Chile en este período.

EL GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN

El gobierno de Aylwin tuvo un gran desafío: demostrar que la coalición podía dar gobernabilidad a Chile. No era tarea fácil, en tanto se suponía que era prácticamente imposible la convergencia de partidos, con propuestas programáticas muy distintas. Sin embargo, la realidad demostró otra cosa y a poco andar el Gobierno de Aylwin apareció como garantía de gobernabilidad, a través de la Concertación de Partidos por la Democracia. Es aquí donde se empieza a generar un cambio tremendamente significativo. Este es un Gobierno de transición para poder garantizar el paso de dictadura a democracia. Sin embargo, lentamente, se empieza a descubrir que hay otra transición en Chile, más compleja, más difícil: cómo transformar un país con una estructura más bien atrasada, en un país moderno. Un país que tiene que prepararse para competir en el mundo, un país que tiene que profundizar la democracia, un país que tiene que abrir un espacio a la diversidad cultural, un país que tiene que generar avances significativos respecto de los derechos humanos que habían sido violados.

Aquí es, entonces, donde nos parece que se produce el cambio más fundamental: la otra transición. Esa otra transición es la que exige a la Concertación de Partidos por la Democracia mantenerse unida en el tiempo.

Resulta notable que ningún partido político adoptó formalmente el acuerdo de continuar en la coalición, ningún partido político debatió el tema, simplemente con el paso del tiempo y, ante el éxito que estaba teniendo el gobierno, se entendió que era obvio que al

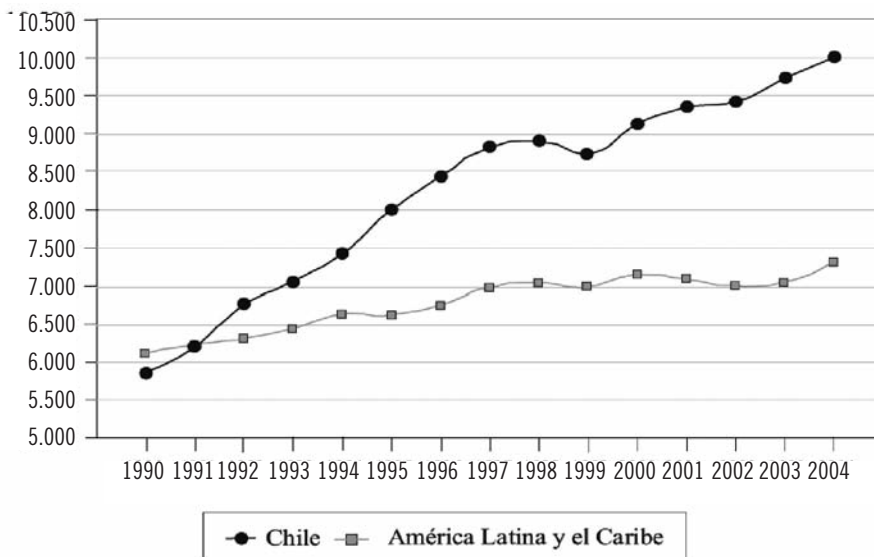
término del mismo la coalición debiera seguir gobernando Chile. De esta manera, lo que era una Concertación con un tiempo limitado en el horizonte, para regir los destinos de Chile, se convirtió en una coalición que emprendía tareas mayores.

Tareas mayores, como plantearse una política social, de suerte que el crecimiento que estaba experimentando el país redundara en beneficios para las mayorías. Esto fue posible financiarlo gracias a una política económica de equilibrio fiscal que, al mismo tiempo, garantizaba niveles de inversión lo suficientemente elevados como para mantener un crecimiento del producto que, a la larga, resultó la gran novedad de la Concertación. En efecto, entre 1990 y 2006 el ingreso *per capita* en Chile aumentó un 4.4 por ciento en un año, en circunstancias que el ingreso *per capita* promedio en América Latina aumentó un 1.1 por ciento al año.

Ese fuerte crecimiento fue acompañado, como decíamos, por políticas sociales para garantizar que el mismo llegara a las distintas regiones y sectores del país. Se trataba de garantizar vivienda, educación, salud, infraestructura, cambios en el sistema judicial, que no tienen parangón en la historia de Chile. Algunas cifras comparativas en el acceso a bienes básicos, dan una idea del enorme salto que este crecimiento con equidad trajo para las familias más modestas de Chile.

Conjuntamente con esos avances en lo económico y lo social, los Gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei y el del suscrito, siguieron profundizando en el desafío de hacer justicia ante las violaciones de los derechos

Gráfico 1
Evolución del PIB per cápita en América Latina y Chile



Fuente: Banco Mundial. Adaptado de Ottone, Ernesto y Vergara, Carlos (2006), *Ampliando Horizontes. Siete claves estratégicas del gobierno de Lagos*, Random House Mondadori, Chile, p. 53.

Gráfico 2
% Acceso a bienes y servicios básicos del 20% de la población más pobre
Censos nacionales 1992-2002

| | 1992 | 2002 |
|------------------------------|------|------|
| Máquina lavadora programable | 0,3 | 46 |
| Refrigerador | 8 | 45 |
| Electricidad | 50 | 83 |
| Agua potable | 40 | 63 |
| Alcantarillado | 5 | 57 |

Nota: Éstas son cifras nacionales. De acuerdo con datos de la encuesta de junio de 2001 del Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile, para el 20% de la población más pobre urbana el agua potable llega al 95,5% y el sistema de alcantarillado al 84,2%.

Fuente: Censos Nacionales de Chile 1992, 2002. Adaptado de Ottone, Ernesto y Vergara, Carlos (2006), *Ampliando Horizontes. Siete claves estratégicas del gobierno de Lagos*, Random House Mondadori, Chile, p. 80.

humanos. La Comisión Verdad y Reconciliación (o Comisión Rettig, por el distinguido jurista Raúl Rettig que la encabezó) se constituyó para dar cuenta de la situación de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Su informe produjo un gran impacto. Cuando el presidente Aylwin pidió perdón en representación del Estado, al informar al país sobre lo ocurrido durante los años de la dictadura, estaba encarnando los sentimientos más profundos de la Nación. La búsqueda de respuestas sobre el paradero de los detenidos desaparecidos continuó durante el Gobierno del presidente Frei y el del suscrito, a través de una Mesa de Diálogo en la que participaron distintos actores: instituciones morales, como las denominaciones religiosas, los abogados que habían trabajado por

la defensa de los derechos humanos y las instituciones armadas.

Quedaba, sin embargo, un grave asunto pendiente. Se había avanzado en aquellos temas e, incluso, en reparaciones para quienes habían sido expulsados de sus trabajos, los exonerados políticos. Sin embargo, quedaba pendiente el dolor de aquellos que habían sufrido prisión política y tortura. Con este propósito, en el año 2003, establecimos una comisión encabezada por el Obispo Monseñor Sergio Valech e integrada por distintos sectores políticos y visiones sociales. Todos aquellos que sentían que sus derechos habían sido violentados, como resultado de la prisión y la tortura, podían declarar ante ella, para establecer la verdad sobre el particular.

Esta comisión, digámoslo, era inédita en el mundo. Nunca una transición había abordado de esta forma el tema de prisión y tortura, hasta donde tenemos información. Y también por ello no fue fácil crearla. ¿En qué medida hacerlo implicaba abrir las heridas? ¿En qué medida podíamos mirarnos unos a otros?

El informe de esa Comisión consigna los recintos donde se practicó tortura, los agentes del Estado que la practicaron, los medios empleados por diversos organismos públicos, identifica las Leyes que ampararon aquellas atrocidades. La conclusión es clara e insoslayable: la prisión política y la tortura fueron una práctica institucional de Estado absolutamente inaceptable, por completo ajena la tradición de Chile.

Que 35.000 chilenos hayan declarado ante la Comisión y que de esos 35.000, 29.000

mil hayan sido reconocidos como presos políticos, a los cuales se les aplicó tortura, fue una forma de cerrar un capítulo tan lacerante para la historia de Chile. «Cerrar un capítulo» es un término inadecuado, por supuesto; pero expresa la voluntad que hubo de sanar las heridas. Hubo también una modesta reparación económica para aquellos que la solicitaron. Sin embargo, creemos que el paliativo mayor fue que aquellos que pudieron hacer su declaración y se les reconoció como presos políticos, encontraron una reparación en su dignidad humana que les ayudó a mitigar el dolor de la tragedia acaecida.

Repito aquí las palabras que pronuncié al entregar aquel informe al país: «porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de frente, podemos empezar a superar el dolor y restaurar las heridas. Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo».

Otro aspecto importante fue el éxito de nuestra coalición en reestablecer el sistema democrático, haciendo numerosos cambios a la Constitución heredada de la dictadura. El último de los cuales, en septiembre de 2005, permitió terminar prácticamente con todos los enclaves autoritarios que habían quedado en la Constitución de Pinochet. Quedó pendiente el peculiar sistema electoral chileno, respecto del cual aún no se han logrado los consensos necesarios para modificarlos.

Todo ello se hizo mientras Chile se abría al mundo. En lo económico esto se logró, no solamente mediante la rebaja unilateral de aranceles que se había comenzado con la dictadura, sino que a través de un conjunto de tratados de libre comercio que permitieron en-

frentar y aprovechar esa apertura unilateral de Chile. La conquista de mercados, que significaron los acuerdos de libre comercio, el sello de excelencia que ello pone en la economía de un país, fue un elemento fundamental en el salto de Chile.

Otro aspecto de esta apertura al mundo fue una política exterior autónoma, anclada en América Latina, en nuestra región, pero también atenta a lo que son los intereses globales del país. El decir, el no a la guerra en Irak, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue porque se quería llevar adelante una coalición para enfrentar las dificultades en ese país al margen del sistema de Naciones Unidas. Y esto iba en contra de la política de Chile.

Los países pequeños entendemos que el mundo multilateral es fundamental. Las instituciones que deben reglar a futuro el mundo globalizado son esenciales y de ahí entonces que hacer definiciones, al margen de las instituciones de Naciones Unidas, iba en contra de nuestros intereses.

Nuestra coherencia con esos principios de política exterior quedó demostrada nueve meses después de la invasión a Irak, cuando en 72 horas soldados chilenos, bajo el mandato de Naciones Unidas, llegaron a colaborar en la pacificación de Haití. Donde hasta el día de hoy se encuentran.

EL FUTURO

La transición es obra del pueblo de Chile, de sus 15 millones de habitantes. Sin embargo, ha sido la conducción de esta coalición lo

que ha permitido al país avanzar en los distintos campos y lo que le genera ahora desafíos futuros.

Al término del Gobierno de la presidenta Bachelet se habrán cumplido 20 años de Gobiernos de la Concertación. En un momento planteamos al país que «Mañana será otro Chile». Y, qué duda cabe hoy que, cuando culminen estos veinte años de gobierno, Chile será, porque ya lo es, otro Chile. Un país que ha logrado reducir el número de ciudadanos que viven bajo la línea de pobreza de un 38 por ciento a un 13, en 16 años, o la indigencia de un 13 por ciento a un 3, en el mismo período, es un país que se transforma profundamente.

Esto implica también, por cierto, que el futuro tiene que plantear nuevos desafíos a la coalición. Son sus éxitos, precisamente, los que obligan a la Concertación a repensar las demandas de una nueva agenda para Chile. Una agenda en la cual el acceso a la educación superior, la mejora en la calidad de vivienda y, en general, cada uno de los avances logrados, lleguen a todos los chilenos.

Pero aún más importante que eso, en dicha agenda, es que Chile tendrá que resolver qué tipo de sociedad quiere formar en materias como seguridad en educación, salud, vejez. ¿Un sistema moldeado como la sociedad norteamericana o uno de corte más solidario, como el que existe en buena parte de la Unión Europea? Es cierto que ambos modelos de sociedad implican muy distintas formas de financiamiento. Y que eso implica, entonces, plantearse cómo vamos a permear la sociedad del futuro. Y es aquí donde creo que se darán las

batallas venideras en el Chile que entra al Siglo XXI. ¿Vamos a tener una sociedad que se hace a imagen y semejanza del mercado, reproduciendo las desigualdades que el mercado trae consigo o vamos a tener una sociedad en donde el mercado cumple un rol importante para asignar recursos económicos, pero son los ciudadanos, a través del voto, quienes establecen el tipo de sociedad que desean?

Es allí donde estará la nueva línea divisoria. Y es aquí donde la Concertación tiene que estar a la altura de los logros que hasta ahora ha tenido. Para repensar su ideario, para repensar las tareas que tiene por delante y en base a los logros alcanzados poder plantear una meta a futuro.

Es cierto, la Concertación tiene mucho de que sentirse orgullosa. Ha habido también

errores, como en toda obra humana, ha habido no sólo luces sino también sombras, pero eso no desmerece en absoluto el lugar que esta coalición se ha ganado en la historia de Chile. Sin embargo, será en torno de la agenda de futuro donde la coalición podrá ganarse el derecho a seguir gobernando Chile. La tarea de tener una sociedad más solidaria debe ser tan importante como lograr la plenitud del desarrollo económico, tras el cual hoy están encaminados nuestros pasos.

Sí, llegar a tener una sociedad que forme parte del mundo desarrollado está al alcance de la mano. Como dijo el Premio Nobel Junus, Chile será el primer país en derrotar la pobreza. Estamos en vías de ello. Pero al lograrlo queremos ser también un país donde el desarrollo alcance a todos los hijos de nuestra patria.

En torno al Chile que está siendo

Around Chile's being

OSVALDO PUCCIO HUIDOBRO
Embajador de Chile en España

RESUMEN

La vuelta de la democracia a Chile coincidió con el fin de la guerra fría, ganando rápidamente la transición a la democracia un gran apoyo y simpatía internacional. El nivel de consenso logrado por los gobiernos de la Concertación demostró que era posible derrotar a la dictadura por un camino de inclusión y sin rupturas, y romper lo que por décadas parecía una fatalidad del sistema político, su división en tres tercios.

Entre los grandes logros alcanzados en democracia, se pueden mencionar el eficiente manejo y desarrollo de la economía, las reformas y avances institucionales, incluida la promulgación de una nueva Carta Fundamental firmada por Ricardo Lagos, así como el más complejo y desafiante de todos, dar cuenta y avanzar efectivamente en el conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos.

Palabras clave: Transición democrática. Concertación. Derechos humanos. Reforma del Estado. Movimiento sindical.

ABSTRACT

In Chile, the return to democracy coincided with the end of the Cold War. The emerging democratic transition received worldwide support and sympathy. The level of internal consensus reached by the Concertación demonstrated that it was possible to defeat dictatorship and, at the same time, avoid rupture, by following a path of inclusion and bringing an end to what seemed inevitable for decades in the political system: its division in three political blocks representing left, right and centre forces.

An unprecedented success in Chile's history was the broad consensus reached on economic policy, social development and institutional reforms that included the enactment of a new Constitution signed by President Ricardo Lagos. All of them represented different levels of complexity by accommodating somehow antagonising views. The most difficult and challenging of all initiatives was the recognition of truth and the need for justice that included reparation for the victims of gross human rights violations.

Key words: Democratic transition. Concertación. Human rights. State reform. Trade union movement.

Este año conmemoraremos veinte años, desde que las fuerzas coaligadas en la concertación por el NO lograran que, una sustantiva mayoría de chilenas y chilenos, afirmara aquella opción que daba curso a la posibilidad, un año después, de elegir democráticamente a un presidente de la República, acabando, por vía del voto popular, con una dictadura que se había entronizado en Chile, a través de un golpe de Estado que, no sólo fue el periodo de mayor injusticia y violencia en el país, sino que devino, en el plano internacional, en la representación más palmaria y simbólica de las dictaduras latinoamericanas, surgidas en la oleada que comenzó a mediados de los sesenta, con el derrocamiento de Joao Goulart en Brasil.

Los antecedentes más inmediatos del Chile que comienza su andadura democrática el año 90, son conocidos y fuente, probablemente por muchos años, aún de visiones encontradas, pasiones y memorias que polemizan e interpretaciones que habrán de discrepar. El Gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende —de cuyo nacimiento se cumplirán cien años en junio—; el golpe de septiembre de 1973, con su reguero de dolores y desgarros, y los largos 17 años de Gobierno de derechas, a través de una dictadura de impronta militar, cuyo juicio y herencia la sociedad chilena aún no logra asumir del todo, son antecedentes ineludibles —más allá de la perogrullada de la continuidad histórica— que es imposible soslayar, a la hora de inteligir y comprender a cabalidad lo que ha sucedido en Chile, desde la elección de Patricio Aylwin en adelante.

Pocas cosas, en nuestra vanidad provincial, nos satisfacen más a los chilenos que es-

cuchar de otros o expresar nosotros mismos nuestra propia singularidad, la condición de caso extraordinario en la región, cuando no definitivamente único y, además, ejemplar. Esto, que en rigor no es del todo cierto, no obsta para que, de cara al desarrollo y evolución de ciertos procesos políticos, haya rasgos y momentos de originalidad que se destacan por su carácter propio y trasgresor de lo que, en teoría, debían ser reglas más o menos generales. Procesos como los de la Unidad Popular, el golpe de Estado, el devenir y desarrollo de la dictadura y las transformaciones llevadas adelante en el manejo económico, así como la manera como retornamos a la democracia, hacen que la tentación de subrayar la originalidad suela ser tan justificada como irresistible.

No es corriente en América Latina que una generación pueda mirar con orgullo, y aun con satisfacción, lo que ha sucedido en un periodo de algo más de tres lustros y que, al mismo tiempo, comprenda que no hay ni tiempo ni motivo para la autocomplacencia. No cabe duda que una mayoría larga de los que en Chile han estado involucrados, en el sentido más amplio, en el desarrollo de la sociedad pueden hacerse cargo, aun desde perspectivas políticas muy distintas, de ambas actitudes: de la satisfacción por lo hecho y, conjuntamente, de la conciencia de los desafíos por cumplir.

Pero vamos por partes y tratemos de desentrañar ambas caras de la moneda.

Al inaugurarse la recién reconquistada democracia, Chile podía mirar a los incipientes procesos democratizadores, en un número

significativo de países de la región. Contaba para sí con un apoyo y una simpatía internacional que cubría un registro ideológico, político, social y cultural, a nivel mundial, que tenía contadísimos precedentes. A ello contribuía, desde luego, el hecho de que Pinochet se había convertido en la encarnación simbólica de todo lo rechazable en el planeta, y también a que la coalición que comenzaba a gobernar era, a ojos de la política internacional, de un gran pluralismo y, en sus vínculos, contaba con apoyos significativos en EE.UU., cubría en Europa —dadas sus adscripciones internacionales— prácticamente el arco completo de los Gobiernos de esa zona, y la solidaridad internacional, con las fuerzas antidictatoriales, eran una extensa red de contactos y simpatías en todos los continentes.

Al mismo tiempo, sucedía a nivel internacional el más grande cambio en el panorama mundial desde el fin de la segunda guerra. El sistema del socialismo real imploraba de un modo en rigor inesperado, tanto para las mentes más lúcidas como para las más afebradas de la guerra fría, que tocaba a su fin. Se generaba, así, una situación completamente nueva en la que la incipiente transición democrática chilena supo situarse de modo flexible e inteligente.

El fin de la guerra fría abrió o, dicho con exactitud histórica, reabrió una dinámica en las relaciones económicas internacionales que se había visto interrumpida, o congelada, con el triunfo de la Revolución rusa el 1917. El juego del mercado volvía a desarrollarse a nivel planetario y el que no se situaba en ese escenario y no jugaba de manera dinámica y

abierta en ese terreno, dejando de lado temores y prejuicios, iba a pagar costos altos por llegar tarde. Chile, aun a costa de cierta merma en su política regional, hizo uso de la simpatía y de los apoyos, con que contaba internacionalmente, para iniciar una política de inserción económica internacional que le significó, a la larga, devenir en una economía sólida, abierta, orientada al exterior y muy soberanamente asentada en los centros más dinámicos del mundo global.

En este punto, el nivel de consenso en el país, logrado por los Gobiernos de la Concertación, fue extraordinariamente alto, tanto a nivel de las fuerzas políticas como al del apoyo y aceptación ciudadana. En este marco, además, fue produciéndose un giro de sectores amplios de la empresa, que vieron a los Gobiernos de una alianza de centroizquierda cada vez menos como amenaza y, crecientemente, como una oportunidad eficaz y eficiente de representación nacional, con condiciones cosmopolitas y de aceptación en el mundo, cuyo desplante y aceptación jamás pudieron soñar en el Gobierno de Pinochet.

La exitosa y compartida inserción internacional del país fue un pie firme para las más complejas tareas que quería llevar a cabo la coalición, en la política interna.

La vuelta a la democracia había demostrado, no solamente que era posible derrotar a la dictadura por un camino de inclusión y sin rupturas que desgarraran nuevamente a la sociedad chilena, sino que era posible romper lo que, por décadas, parecía una fatalidad deseada del sistema político: su división en tres tercios, la derecha, la izquierda y el

centro que, al mismo tiempo, competían, se excluían y creían representar proyectos fundacionales que descartaban necesariamente al otro.

La superación de los tres tercios, que impidieron por décadas la cristalización política de la mayoría electoral progresista y fueron causa sustantiva del golpe del 73, significó, en la práctica, la conformación de una mayoría nacional nueva y novedosa de centroizquierda, que daba cuenta de una realidad nacional, surgida ya en los años veinte del siglo pasado. La derecha en el Chile moderno ha sido siempre minoría —la última elección presidencial la ganó hace más de cincuenta años... aunque por otros caminos se permitió una pausa de diecisiete—. Esa derecha, sin embargo, tuvo desde los inicios de la transición, un fortalecimiento electoral significativo y una legitimación ciudadana indiscutible, que se ha visto favorecida por un sistema electoral que la subvenciona y una prensa que le es casi incontrarrestablemente adicta.

De este modo, y visto desde la simple factualidad democrática de la existencia de un complejo juego de mayorías y minorías en el país, los avances de los Gobiernos de la transición han sido una compleja dialéctica de compromisos, avances graduales y reformas consensuadas.

En este aspecto, quizá una de las transformaciones culturales más importantes de Chile es que este hecho, que podría haber sido visto por la izquierda como una suerte de fatalidad táctica o como un imperativo de la «correlación de fuerzas», ha sido asumido por la mayoría de ella como un modo, no sólo

deseable, sino eficiente para llevar adelante una política transformadora.

Desde el punto de vista de la cultura tradicional de la izquierda, que ha tenido una no menor hegemonía en el proceso democrático, y también de parte del centro político, que se adscribió en los sesenta a los cambios más radicales, la transición fue el espacio en el que, en su conceptualidad y su praxis, asumieron el gradualismo de la transformación como la vía natural y mejor de hacer política.

Dicho de otro modo, los empeños de Frei Montalvo, en los sesenta, y de Allende, en los setenta, de articular en Chile el binomio libertad e igualdad, en la forma como Bobbio debate estos conceptos, ha encontrado en la transición el cauce democrático y de mayoría que hacen posible su realización.

Posiblemente la tarea más difícil, a la que se hubo de abocar la transición desde sus inicios, fue la de dar cuenta de las situaciones generadas por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como una política de Estado.

Hay, sin duda, otros aspectos de este período de gran complejidad y éxito, como el manejo y desarrollo de la economía, transformando, en palabras de Manuel Castells, un modelo «autoritario, liberal y excluyente» por uno «democrático, liberal e incluyente». Uno que excluyó a la gran mayoría de los beneficios del crecimiento por otro, de signo opuesto, que ha conseguido incluirlos sustantivamente. Ello se hizo asumiendo, en gran parte al principio, el sistema económico instaurado por la dictadura, para luego ir

reformándolo y ajustándolo gradualmente, con un enfoque centrado en el plano social. La reducción de la pobreza pasó, entre 1990 y 2006, de un 38.6 por ciento a un 13.7 y la indigencia, de un 13 por ciento a 3.2, un logro sin precedentes en la región. A ello se puede agregar que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Chile ocupó el lugar 38 en el Ranking de Desarrollo Humano, entre 180 países, siendo superado por Argentina (36) y Barbados (31), dentro de América Latina y el Caribe. Pero no sólo hubo un cambio de sello, sino un evidente mejor manejo en la economía al que hubo durante la dictadura, como demuestran casi todas las cifras y ejemplifica el hecho de que el PIB del 2000 ya duplicaba el del 89 y, en el 2005, había crecido un nuevo 21 por ciento. Entre 1989 y el 2005 se duplicó, a su vez, el ingreso per cápita, llegando a 12.000 dólares en «paridad de poder adquisitivo».

Un capítulo propio de la transición lo constituyen las reformas y avances institucionales, hechos durante el periodo. Ellos se enmarcaron, durante quince años, en una Constitución Política, que mantuvo la rúbrica del dictador y a la que se le fueron introduciendo reformas, tras complejos y trabajosos procesos de negociación con la oposición que, dado el quórum requerido por la propia Carta Magna para su reforma, era de singular dificultad. Sólo en 2005, tras una larga negociación, fue posible que Chile contara con una Constitución con legitimidad parlamentaria, que asumía un número importante de cambios y de reformas institucionales democráticas, que reponía claramente la primacía de las instituciones civiles y legitimadas y que,

lo que simbólicamente era muy importante para Chile, era firmada por Ricardo Lagos, como presidente constitucional.

En este plano y junto con ello, los Gobiernos de la Concertación impulsaron, ya desde el Gobierno del presidente Aylwin, muy diversos empeños de modernización de la gestión pública y de reforma del Estado. Ellos fueron, desde políticas públicas e iniciativas legales de descentralización y desconcentración de Estado, hasta avanzados desarrollos de Gobierno electrónico o participación ciudadana.

Pero como dijimos, el aspecto más complejo de la transición fue dar cuenta del desafío que significaba asumir, como país, la violación sistemática de los derechos humanos. Fue justamente en este plano —donde hubo la necesidad de cuidar los equilibrios, hacer gala de prudencia y generar más actos y avances efectivos que retórica— donde la Concertación y sus gobernantes demostraron mayor talento y pericia, talento y pericia que sólo es explicable desde la convicción profunda y acendrada de que la buena solución de ese desafío constituía, al final de cuentas, la piedra angular sobre la que habría de sustentarse todo el edificio transformador que esa propia coalición había asumido como tarea.

En los avances en este plano concurren sectores muy diversos de la sociedad —también de los que habían sido parte de la propia dictadura— junto con la acción ejemplar y consistente de las víctimas y unas políticas muy claras y activas de cada uno de los Gobiernos de la Concertación.

Con certeza, hoy se puede decir en Chile que son sectores muy minoritarios los que no han querido asumir una verdad, socialmente aceptada, que reconoce las atrocidades cometidas, y se puede afirmar, también, que no hay un solo grupo, que haya visto conculcados sus derechos, que no haya recibido un reconocimiento público y simbólico, por parte de las máximas autoridades del Estado. También ha sido importante que los principales responsables materiales de la represión hayan sido, prácticamente todos, judicializados, cuando no condenados.

Es la profundidad de los cambios acontecidos en Chile desde el 90 en adelante los que explican, no sólo el hecho de que la coalición de Gobierno haya ganado las trece elecciones generales realizadas en ese periodo, sino, paradójicamente —y este es el otro lado de la moneda— también el creciente nivel de expectativas y aspiraciones de la ciudadanía, que espera grados mayores de satisfacción de intereses y necesidades que tienen también que ver con un salto en las condiciones actuales de la sociedad.

Desde luego, esta transformada sociedad chilena precisa de cambios significativos en su propia institucionalidad, cambios que den cuenta de los requerimientos de mayor inclusión y participación de territorios y ciudadanos, que hoy no encuentran vías convocantes y expeditas de influencia e incidencia en el devenir colectivo. Un sistema electoral que excluye sectores importantes, un centralismo que sigue siendo muy fuerte o una relación de desequilibrio entre los poderes de Estado, son factores que obligan a pensar en nuevos acuerdos y más amplios consensos,

fundados en los intereses generales, más allá de los, por legítimos que sean, particularísimos partidarios. Estas deficiencias son causa también de un sostenido y, por ratos, alarmante desapego de la ciudadanía de los procesos políticos, haciéndose especialmente notable en los tramos erarios más jóvenes.

Urge también acometer una mejora cualitativa en lo que, sin duda, es un notable déficit del proceso de transición: dotar a Chile de una prensa plural, no sólo en el sentido de las adscripciones ideológicas, sino en el tipo de temas, ocupaciones y preocupaciones que refleja.

Largo sería analizar la situación de la prensa en Chile donde, en democracia, se puede hablar, sin temor a equivocarse, de un proceso creciente de unilateralización ideológica —en la escrita es casi completo— junto con una banalidad vulgarizante de la televisión, que marca cada vez más el sello de este medio. Probablemente sólo la radio responde a criterios aceptables de pluralidad de orientaciones y temáticas.

Del mismo modo está pendiente la construcción de un movimiento sindical fuerte y moderno que, no sólo supere un cierto reivindicacionismo arcaico, sino que dé cuenta de la inmensa modernización productiva experimentada por el país y sea, por tanto, factor de un proceso de desarrollo que tienda tanto al crecimiento como a la distribución justa y dinámica de él.

El país se encuentra, luego de un periodo de cambios profundos y positivos como pocas veces en su historia, en el umbral de un

salto al desarrollo, que lo coloque definitivamente en el grupo de países que cumplen todos los requerimientos de una sociedad justa, moderna, democrática y materialmente desenvuelta. Ello dependerá posiblemente menos de las dinámicas de la economía, que de por sí han demostrado una velocidad y un ritmo admirables, y mucho más de la capacidad de la política de dar cuenta de la magnitud del desafío. Y aquí hay, por ratos, señales que obligan a la aprehensión. Los sectores más radicales de la derecha, así como grupos dentro de la propia Concertación, han ido adquiriendo formas y maneras de hacer política en que los intereses particularísimos —no pocas veces rigurosamente individuales en un perverso maridaje con la prensa— son puestos por delante de las posibilidades y búsquedas de acuerdos, que permitan ampliar los espacios de la democracia, acordar los

cambios institucionales necesarios y generar un clima de concordia, que sea el clima nacional necesario para el desarrollo colectivo.

La tendencia al cambio y la voluntad de dar el brinco lo encarna, casi como una metáfora en sí misma, la presidenta Bachelet, que es continuidad de la enorme tarea de cambio de estos años, pero también figura en la que, también sectores de oposición a su Gobierno, ven un factor determinante de ese clima indispensable para ir más allá.

El debate al que nos invita la Revista Quórum de la Universidad de Alcalá contribuye, justamente, al diálogo inteligente, informado, plural que Chile necesita consigo mismo y con aquellos que se sienten cercanos y comprometidos con el destino de mi país y por ello es tan urgente como necesario.